



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

5ª REUNIÓN - 4ª SESIÓN ORDINARIA

25 DE MARZO DE 1998

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,  
doctor **CARLOS F. RUCKAUF**  
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor **EDUARDO MENEM**

Secretarios: doctor **EDGARDO R. PIUZZI** y doctora **MATILDE DEL VALLE GUERRERO**  
Prosecretarios: señor **MARIO L. PONTAQUARTO**, señora **BERTA ALDALUR**  
y doctor **ALFREDO A. LUQUES**

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AGÜNDEZ, Jorge A.  
ALASINO, Augusto  
ALMIRÓN, Carlos H.  
AVELÍN, Alfredo  
BARTOLUCCI, Mario L.  
BAUM, Daniel  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BRANDA, Ricardo A.  
BRAVO, Leopoldo  
CABANA, Fernando F.  
CAÑIERO, Antonio F.  
CANTARERO, Emilio M.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA ROSA, Carlos L.  
DE LA SOTA, José M.  
DEL PIERO, Pedro  
FIGUEROA, José O.  
GALVÁN, Raúl A.  
GARCÍA ARECHA, José M.  
GENOUD, José  
GIOJA, José L.  
HUMADA, Julio C.  
LEÓN, Luis A.  
LÓPEZ, Alcides H.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MAGLIETTI, Alberto  
MANFREDOTTI, Carlos  
MARANGUELLO, Pedro C.  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSACCESI, Horacio  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.  
MELGAREJO, Juan I.  
MENEM, Eduardo

LOUDÍN, Ernesto  
OYARZÚN, Juan C.  
PARDO, Angel F.  
PENÁ de LÓPEZ, Ana M.  
PRETO, Ruggero  
REUTEMANN, Carlos A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
ROMERO FERIS, José A.  
SÁEZ, José María  
SALA, Osvaldo R.  
SALUM, Humberto E.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe R.  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado H.  
TELL, Alberto M.  
ULLOA, Roberto Augusto  
USANDIZAGA, Horacio D.  
VAQUIR, Omar M.  
VERNA, Carlos A.  
VILLARROEL, Pedro G.  
VILLASVERDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge R.  
ZALAZAR, Horacio A.

### AUSENTES, CON AVISO:

GAGLIARDI, Edgardo  
MENEGHINI, Javier R.  
MIRANDA, Julio  
MOREAU, Leopoldo R. G.  
SAGER, Hugo Abel  
VARIZAT, Daniel A.

### EN COMISION:

BAUZÁ, Eduardo

### POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

## SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría (Pág. 1403.)
2. Por invitación del vicepresidente de la Nación, el señor senador por el Neuquén, don Daniel Baum, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 1403.)
3. Informe del señor jefe del Gabinete de Ministros. (Página 1403.)
4. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se derogan las leyes de punto final y de obediencia debida. (C.D.-1198.) (Pág. 1428.)
5. Asuntos entrados:
  - I. Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado. (Pág. 1445.)
  - II. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Reforma Laboral. (P.E.-16/98.) (Pág. 1446.)
  - III. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo sobre observación parcial de la ley 24.946 del Ministerio Público (P.E.-17/98). (Página 1450.)
  - IV. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo sobre autorización a la firma Meller S.A. para que transfiera sus acciones en favor de Aguas Argentinas S.A. (P.E.-30/98). (Pág. 1450.)
  - V. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 1451.)
  - VI. Proyecto de ley en revisión por el que se sustituye un artículo de la ley 24.760, factura de crédito, respecto de su creación y forma (C.D.-10/98). (Pág. 1452.)
  - VII. Proyecto de ley en revisión por el que se derogan las leyes de punto final y obediencia debida (C.D.-11/98). (Pág. 1453.)
  - VIII. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 1453.)
  - IX. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 1453.)
  - X. Comunicaciones oficiales. (Pág. 1453.)
  - XI. Dictámenes de comisiones. (Pág. 1454.)
  - XII. Peticiones particulares. (Pág. 1456.)
  - XIII. Proyecto de declaración del señor senador Usandizaga sobre instalación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en América latina (S.-205/98). (Pág. 1456.)
  - XIV. Proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicitan informes sobre casos de zoonosis en el Zoológico de Mendoza (S.-206/98). (Pág. 1456.)
  - XV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre derechos del consumidor y la publicidad (S.-207/98). (Pág. 1458.)
  - XVI. Proyecto de comunicación del señor senador Usandizaga por el que se solicitan informes sobre una reunión con agentes del sector agrícola previa a la reunión de la OMC (S.-208/98). (Pág. 1459.)
  - XVII. Proyecto de comunicación del señor senador Martínez Almudevar por el que se solicita que el Banco de la Nación Argentina re programe las deudas de productores agropecuarios de Hucal, La Pampa (S.-209/98). (Pág. 1459.)
  - XVIII. Proyecto de resolución del mismo señor senador por el que se otorga el auspicio del Honorable Senado a varios congresos sobre oncología (S.-210/98). (Pág. 1460.)
  - XIX. Proyecto de declaración del señor senador Alasino sobre reintegro de un inmueble al patrimonio de Entre Ríos (S.-211/98). (Página 1460.)
  - XX. Proyecto de declaración del señor senador Romero Feris por el que se repudia la agresión contra un periodista, por parte de un funcionario municipal de San Carlos, Santa Fe (S.-212/98). (Pág. 1461.)
  - XXI. Proyecto de comunicación del señor senador Tell por el que se solicita la inclusión en el Plan Social Educativo del Colegio Secundario N° 3 "San José" de Perico, Santa Fe (S.-213/98). (Pág. 1462.)
  - XXII. Proyecto de comunicación del señor senador López por el que se solicitan informes sobre los fondos del Programa "Transferencias a provincias y comisiones interjurisdiccionales" (S.-214/98). (Página 1462.)
  - XXIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita un subsidio para la pavimentación de un tramo de la ruta provincial 38 en Entre Ríos (S.-215/98). (Pág. 1462.)
  - XXIV. Proyecto de comunicación del señor senador Romero feris por el que se solicitan informes sobre la construcción de una ciudad judicial (S.-216/98). (Pág. 1463.)
  - XXV. Proyecto de ley del señor senador Genoud por el que se declara de interés nacional y legislativo el Congreso Internacional de Radiología (S.-217/98). (Pág. 1464.)
  - XXVI. Proyecto de resolución del mismo señor senador por el que se expresa solidaridad con la comunidad judía y se repudia el atentado contra la Embajada de Israel (S.-218/98). (Pág. 1464.)

**LXXIII. Proyecto de comunicación del señor senador Zalazar por el que se solicita se instrumenten medidas para paliar los efectos de las inundaciones en el Chaco (S.-265/98). (Pág. 1511.)**

**LXXIV. Proyecto de resolución del señor senador Romero Feris por el que se declara de interés educativo la 15ª Olimpiada Matemática Argentina y la 7ª Olimpiada Matemática Nandú (S.-267/98). (Pág. 1511.)**

**LXXV. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se expresa beneplácito por la conmemoración del cuarenta aniversario de la Editorial de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA) (S.-268/98). (Página 1512.)**

**6. Lectura y aprobación, con modificaciones, del plan de labor para la sesión de la fecha. (Pág. 1512.)**

**7. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el que se incorporan los programas de computación al régimen de la ley 11.723 (propiedad intelectual). Se levanta la sesión por falta de quórum. (Página 1514.)**

**8. Apéndice:  
Sanción del Honorable Senado. (Pág. 1531.)**

# 1

## MANIFESTACIONES EN MINORIA

—En Buenos Aires, a las 16 y 52 del miércoles 25 de marzo de 1998:

**Sr. Presidente.** — Si los señores auxiliares de bloque colaboran con la Presidencia para lograr quórum, podemos comenzar a sesionar, dado que el señor jefe de Gabinete de Ministros ya se encuentra en antesala.

—A las 16 y 55:

**Sr. Avelín.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Para colaborar con la Presidencia, ¿cuántos señores senadores hay en la casa?

**Sr. Presidente.** — Hay 52 senadores y senadoras.

**Sr. Avelín.** — Como en antesala se encuentra el señor jefe de Gabinete de Ministros, solicito al señor presidente que efectúe el pedido correspondiente a los presidentes de las distintas bancadas para que bajen al recinto los señores senadores.

**Sr. Presidente.** — A pedido del señor senador por San Juan, reitero a los señores auxiliares de bloque

que informen a los señores senadores de todos los bloques que se encuentra en antesala el señor jefe de Gabinete de Ministros.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 14:

**Sr. Presidente.** — La sesión está abierta.

# 2

## IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente.** — Invito al señor senador por el Neuquén señor Daniel Baum al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Baum procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

# 3

## INFORME DEL SEÑOR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

**Sr. Presidente.** — Se encuentra en antesala el señor jefe de Gabinete de Ministros, ingeniero Jorge Rodríguez, quien está acompañado de sus colaboradores, con el objeto de brindar el informe prescripto por el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Si hay asentimiento, por Secretaría se los invitará a ingresar en el recinto.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Se procederá en consecuencia.

—Ingresan en el recinto el señor jefe de Gabinete de Ministros, ingeniero Jorge Alberto Rodríguez; la secretaria de Equidad Fiscal, doctora Carola Pessino; el señor secretario de Desarrollo Social, licenciado Eduardo Amadeo; el señor secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, ingeniero Néstor Alcalá; el señor secretario de Control Estratégico, licenciado Miguel Solé, y el señor secretario de Política Económica, doctor Carlos Rodríguez.

**Sr. Presidente.** — Continúa la sesión.

Con la presencia del señor jefe de Gabinete de Ministros se va a cumplir con el objetivo de brindar el informe, tal como dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros.

**Sr. jefe de Gabinete de Ministros.** — Señor presidente, señoras y señores senadores: iniciamos un nuevo año de informes de la acción del gobierno al Honorable Congreso.

4

**PUNTO FINAL Y OBEDIENCIA DEBIDA**

**Sr. Presidente (Menem).** – En la reunión de presidentes de bloque de ayer se decidió repudiar el golpe militar del 24 de marzo de 1976. A tales fines tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Alasino.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** – Señor presidente: nosotros además del homenaje a las víctimas de ese golpe vamos a proponer que, como corolario, tratemos sobre tablas y aprobemos la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final, proyecto de ley que fuera sancionado ayer por la Cámara de Diputados.

Considero que esto, más allá de los discursos que pronunciemos, sería darle un buen término a este tema. Pensamos que prácticamente la mayoría de los bloques va a estar de acuerdo con el tratamiento sobre tablas de ese proyecto que hoy ha entrado en el Senado.

**Sr. Presidente (Menem).** – En su momento tendrá que formular el pedido pertinente, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** – Señor presidente: estaba en el entendimiento de que las exposiciones que se realizarían en homenaje a las víctimas del proceso nefasto que se inició con aquel golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 servirían de fundamento para inmediatamente después tratar sobre tablas la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. En consecuencia, pensamos que estos dos temas tendrían que ser considerados como un único punto.

Así lo habíamos acordado con los presidentes de bloque, si bien formalmente, luego de las exposiciones, votaríamos la derogación de las dos leyes.

**Sr. Presidente (Menem).** – Señor senador: como tenía único no se pueden tratar. Lo que se puede indicar en el momento de la votación es que “el proyecto se aprueba por las razones dichas anteriormente”.

Tratemos las cosas con orden y vamos a conseguir el mismo resultado.

Para hablar sobre el repudio al golpe militar del 24 de marzo de 1976 tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. De la Sota.** – Señor presidente: no estamos hoy reunidos en esta Cámara para repudiar un golpe más.

Estamos haciendo referencia a la última de las interrupciones institucionales que va a sufrir nuestro país, porque los argentinos, con la enseñanza del 24 de marzo de 1976, hemos recogido el mensaje de la necesidad de que todos –absolutamente todos– este-

mos sentados a la mesa de la estabilidad institucional.

El 24 de marzo de 1976 un grupo de hombres, armados por la Constitución para su defensa, resolvieron unilateral y cínicamente poner punto final a las instituciones.

Así comenzó uno de los periodos más trágicos de nuestra historia: el de las desapariciones, la muerte, el terror y la capucha. Una etapa en la que quienes ocuparon el poder se igualaron en los métodos con aquellos a los que decían combatir. Todo esto nos lleva a los argentinos, seguramente, a recordar esa noche como la más triste que ha padecido la historia nacional.

Han pasado los años, pero no debemos perder nuestra capacidad de recordación. Debemos aprender de otros pueblos que han sufrido mucho; debemos hacer con esa fecha lo mismo que hicimos cuando conmemoramos el “día de la memoria” el año pasado, lo mismo que la comunidad judía hace con el holocausto del *ghetto* de Varsovia. Tener presente lo que nos pasó es la mejor garantía para que no nos vuelva a ocurrir.

Esa fecha, que ha signado tan negativamente la historia nacional, no puede ser considerada como una más de aquellas en que se produjeron las numerosas y lamentables interrupciones de la vida democrática argentina. Porque no se trató de un golpe más; se trató de la más atroz y sangrienta de las dictaduras y, al mismo tiempo, de la excusa que usaron ciertos factores de poder, que se valieron de quienes detentaban el poder militar para dejar de lado las posibilidades de convivencia que teníamos los argentinos.

Quienes hoy estamos cerca de cumplir cincuenta años, somos profundamente amantes de la paz, porque lamentablemente hemos crecido en una Argentina llena de violencia. Somos profundamente amantes de la democracia, porque hemos vivido más tiempo bajo interrupciones institucionales que bajo sistemas de respeto hacia las libertades públicas. Porque amamos la democracia y defendemos la paz, queremos que el 24 de marzo nos ayude a mantener la memoria y proporcione fuerzas para que todos, con humildad, hagamos una autocritica con respecto a las corresponsabilidades del pasado.

Creo que nuestra sociedad civil ha manifestado su arrepentimiento. Lo han hecho los partidos políticos reconociendo los errores y desencuentros de los argentinos que llevaron a algunos a participar de distintos gobiernos de facto; lo han hecho también los propios militares, como lo hemos podido comprobar últimamente a través de las reiteradas expresiones del general Balza, quien ha afirmado que las fuerzas armadas nunca más ocuparán el espacio político que nunca debieron haber ocupado.



También ha manifestado su arrepentimiento la Iglesia, la cual a través de algunos de sus pastores ha dicho públicamente que ella no defendió acabadamente a su grey sufriente frente a las agresiones de la dictadura militar, de lo cual se arrepiente.

También han hecho su autocritica los hombres del campo sindical, quienes hoy muchas veces postergan legítimos intereses sectoriales en virtud de la necesidad de construir, día a día, una democracia que sea cada vez más fuerte económicamente y cada vez más justa socialmente en aras del interés general.

Asimismo, han participado de esta actitud los hombres del empresariado, quienes han comprendido que el desarrollo de la economía debe, para ser legítimo, ir de la mano del desarrollo de los derechos humanos, de las libertades públicas, de la justicia y de la equidad social.

También lo han hecho algunos factores formadores de opinión; aunque no todos. Tengo aquí sobre mi banca algunos recortes de manifestaciones de medios de prensa de mi provincia con relación a lo ocurrido el 24 de marzo de 1976.

El mismo día del golpe de Estado uno de esos medios decía que "el ciudadano común y honesto aguardaba con justificada expectativa que comenzara una etapa constructiva que restaurase el orden, la convivencia y terminara con los odios y resentimientos entre hermanos."

Un año después, otro medio decía que "hacia un año las fuerzas armadas habían asumido el gobierno de la República Argentina, en virtud de una razón de Estado y respondiendo al clamor público". Continuaba diciendo que "a diferencia de otras intervenciones militares, la del 24 de marzo se caracterizó por ser la única respuesta posible a un estado de postración moral y material, que había carcomido hasta los cimientos de la sociedad argentina". Más adelante, continuaba señalando que, en una palabra, "a partir del 24 de marzo se habían creado las condiciones para la recuperación nacional". Decía que había cuestiones que eran y debían ser objeto de controversia y revisión, pero "dentro de los canales abiertos por ese proceso y con el sentido expreso de afirmarlo y consolidarlo".

Qué pena que algunos que deben formar opinión hayan extraviado tanto el rumbo, sin haber coincidido en lo que son contestes los grandes pensadores de la democracia: los males de la democracia se resuelven con más democracia. Esta debió ser la inalterable línea de conducta de quienes tenían la responsabilidad de ser formadores de la opinión pública en el país.

Seguro que algunos de ellos todavía tienen el arrepentimiento pendiente y es bueno que todos hagamos

este ejercicio de humildad, porque la concordia y convivencia se basan en el reencuentro y este se logra a través de la determinación de lo que realmente ocurrió y de la admisión de las culpas que los distintos sectores de la sociedad han tenido en lo sucedido.

Este proceso militar dejó en la Argentina cicatrices, huellas profundas, madres que todavía quieren saber el destino de sus hijos y familias divididas por el odio. Algunos justificaron lo ocurrido y otros dejarán el mundo sin poder aceptarlo.

Desde la recuperación de las instituciones democráticas, los dos gobiernos que eligió el pueblo argentino han ensayado soluciones de reconciliación.

En la primera etapa, el afianzamiento de las instituciones corrió riesgos. Hubo hombres de las fuerzas armadas que se negaban a admitir la crítica y, mucho menos, a hacer la autocritica de la llamada "doctrina de la seguridad nacional".

Los planteos previos a las leyes de obediencia debida y de punto final motivaron que quienes éramos diputados de la Nación en aquel entonces hiciéramos largos y agobiantes debates buscando las coincidencias que nos permitieran resguardar el poder civil.

Debemos decirlo con claridad: en la primera etapa de la recuperación institucional argentina hubieron momentos en que, cuando se hablaba del poder, buena parte de la sociedad civil no sabía si mirar hacia la Casa Rosada y el Congreso o hacia los cuarteles; que todavía estaban en ebullición.

Fue el gobierno de la Unión Cívica Radical, como responsable de la conducción del Estado, quien asumió en soledad el costo de sancionar las leyes de obediencia debida y de punto final.

Recuerdo la noche en que tratamos la ley de obediencia debida. Los hombres de la Unión Cívica Radical que estaban en la Cámara de Diputados de la Nación, frente a las expresiones de la bancada opositora, que no tenían en mira especulaciones bastardas de tipo electoral, sino que eran reflexiones en público que pretendían ayudarnos a coincidir, pidieron un cuarto intermedio para poder ir a consultar con el propio presidente Alfonsín la posibilidad de modificar, de alguna manera, la legislación que el Poder Ejecutivo había llevado a la consideración del Congreso.

Sé que al votar las leyes de obediencia debida y de punto final, demócratas del oficialismo radical levantaron su mano por responsabilidad partidaria, por disciplina y por necesidad de Estado, sin por eso haber cedido sus profundas convicciones de que era necesario para la reconciliación de los argentinos el esclarecimiento de la verdad y el arrepentimiento, como tantas veces lo dijera la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.

Lamentablemente, esto no pudo ser, y la etapa que quedara inconclusa terminó con el remedio del presi-

dente Menem, indultando a muchos de los responsables del desastre ocurrido en los años oscuros de la capucha y del secuestro en la Argentina.

Debo decirles que no voté las leyes de obediencia debida y de punto final y que no aprobé los indultos decretados por el presidente Menem. Pero al cabo de los años debo reconocer que, aunque no me gustaron, esos remedios han ido ayudando a recuperar la convivencia entre los hombres y mujeres de nuestro país. Hombres y mujeres que queremos la verdad, que estamos dispuestos a seguir apoyando a todos aquellos que buscan el destino de su hijos, como ocurre en Córdoba en donde la Justicia está investigando la existencia de fosas comunes.

O como ha sucedido hace pocos días en la provincia de Buenos Aires, con respecto a la determinación del cadáver de una querida amiga mía, hermana de mi jefe de asesores, la "Tota" Novillo Corvalán. Al cabo de tantos años de haber desaparecido, recién pudimos saber ahora que había aparecido flotando en el río de la Plata con un disparo en la cabeza, fruto de la represión ilegal de la dictadura militar. Esa familia sabe hoy dónde está Tota, y su madre tiene un lugar para poder llevarle una flor. Y hay muchos argentinos que están buscando lo mismo.

La reconciliación no significa olvidar y dejar de lado la posibilidad de seguir dando respuestas a esas madres que piden verdad. Pero sí significa estar dispuestos, todos, a perdonar sin olvidar y a aceptar la necesidad de encontrar un punto de partida que nos proyecte hacia el futuro y que nos permita a los argentinos salir de la tristeza, comenzar poco a poco y pensar cada día más en el mañana y un poco menos en el pasado.

Los hombres y las mujeres de la democracia hoy vamos a derogar las leyes de punto final y de obediencia debida. No porque pensemos que se pueda repetir una situación similar y estemos tratando de garantizar que nadie pueda ampararse en esas normas en el futuro. Nadie necesitará ese amparo porque en la Argentina no habrá, nunca más, interrupciones institucionales de la vida democrática.

Lo hacemos simplemente para dar una clara señal y decir a los hombres y mujeres de nuestro país que la reconciliación significa afirmar la memoria y derogar una legislación que pudo ser útil en un momento dado pero que no debe permanecer como una herramienta en el futuro de todos nosotros.

Por último, señor presidente, quiero decir que esta democracia imperfecta de la cual los argentinos desconfían —porque desconfían de sus dirigentes y trasladan esa desconfianza a las instituciones— sólo puede mejorarse con más democracia.

Esta democracia que hoy aparece sólida y fuerte, como fruto del esfuerzo de todos —de los que siempre

estuvimos reivindicándola y de los que no habiéndolo hecho, terminaron aceptándola y compartiéndola— reclama de todos nosotros trabajo, dedicación, ideas, ponencias, reclama de todos nosotros la "ciudadanización" de la política, el abandono por parte de la clase dirigente de los guetos, en los cuales aparecemos muchas veces como refugiados frente a lo que son las legítimas demandas de nuestra sociedad.

De esa manera rendiremos el mejor homenaje a quienes murieron. De esa manera habremos demostrado que quienes lucharon por sus ideales, que quienes aun equivocando el camino plantearon la necesidad de vivir en libertad, no lo hicieron en vano.

Y los hombres de las fuerzas armadas de hoy, en la medida en que sigan transitando el camino señalado por quienes tienen la responsabilidad de conducirlos, no van a tener que volver a desfilar dentro de los cuarteles. Si son defensores de la Constitución y respetuosos del poder civil —como lo vienen siendo— van a poder volver a desfilar en las plazas del país delante de niños que agiten la bandera nacional y de argentinos que los vuelvan a aplaudir. Esa será la definitiva reconciliación entre hombres y mujeres civiles y militares de la República Argentina.

Ojalá que votando la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final —como lo haremos hoy— contribuyamos a la consolidación de este anhelo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Misiones de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Losada.** — Señor presidente, señores senadores: creo que cuando uno va a expresar algo, como en este caso, vinculado con el horroroso episodio del 24 de marzo de 1976, las palabras parecen débiles e insuficientes, no alcanzan para manifestar con profundidad la vivencia de lo que fue ese desgraciado episodio. Se me produce un estado emocional que supera largamente cualquier caracterización literaria que pudiera hacerse.

Muchas veces a lo largo de la historia argentina, los sectores políticos tuvimos responsabilidades en los episodios de los golpes de Estado. También tuvieron mucha culpa la dirigencia y los partidos políticos, por acción u omisión. No seríamos leales al repudio de este episodio si no aceptáramos primero esta autocrítica.

Debemos decir también que al 24 de marzo no se llegó con la complicidad de ningún sector político. Es como que había una clara intuición de que ese episodio no era simplemente un golpe más y que tenía un comportamiento mucho más perverso, siendo perverso de por sí cualquier golpe de Estado.

Todavía nos acordamos cuando Ricardo Balbín hablaba de llegar a las elecciones con muletas pero

llegar, cuando decía que siempre queda un minuto final para la reflexión; ello, en un país que vivía efectivamente una dura confrontación de intolerancia, con muertes de un lado y del otro.

También este viejo luchador de la democracia visualizó que lo que se venía iba a ser lo más horrible que pudiera pasarle a la sociedad argentina.

No hubo duda en ningún sector político de que ese proceso que se iniciaba sería algo no vivido por los argentinos.

Por supuesto, sobre los argumentos y las justificaciones de los golpistas también cabalgaban los intereses económicos de siempre. No vimos a las grandes potencias o países del poder central poner esfuerzo y compromiso para evitar el golpe de estado. Ocurre que ya se venía manejando la apoyatura a las dictaduras de toda América latina, porque esos países suponían que ésa era la forma de control de las reivindicaciones sociales que vivían estos pueblos.

Esos países centrales que endeudaron a nuestra República para apoyar y fortalecer a los procesos autoritarios y militares son los que hoy vienen a querer cobrarnos la deuda que ellos mismos propiciaron.

Por eso no hubo un solo episodio sino una sumatoria de hechos que nos llevaron a esa desgraciada etapa, que vivimos con sufrimiento los hombres que queríamos la democracia. Pero lamentablemente murieron muchos que también querían la democracia y que no tenían ninguna actitud de violencia. Como decían los jóvenes: "Somos peligrosos por el solo hecho de tener el pelo largo".

Esa fue la Argentina que nos tocó vivir. Pero ese tiempo tan desgraciado también sirvió para la reflexión. ¡Cuánto nos entendíamos los distintos sectores políticos cuando vivíamos el drama de la persecución! ¡Cuántas recriminaciones nos hacíamos por habernos peleado tanto cuando teníamos la democracia! Entendíamos claramente que no era bueno ni saludable para la potencialización democrática, que las discusiones pluralistas legítimas no tenían que pasar ciertos límites de intolerancia.

Es bueno que en este momento de recordación y de repudio también hagamos el análisis de si estamos actuando con la misma comprensión que teníamos en aquellos tiempos, para entender que el debate político y la discusión por los espacios de poder, legítimos en una democracia, están teniendo los límites que deben tener para hacer honor a tanto dolor que se vivió en la Argentina.

Yo también, como diputado nacional, fui actor en esa noche en que se aprobó la ley de obediencia debida. Pertenecía a la bancada oficialista y me acuerdo de ese debate. Y quiero decirles que en mi bloque me opuse a su aprobación, pero respetuoso de la de-

cisión mayoritaria voté la ley, que creía que no era la salida, ni siquiera la solución.

Con la misma franqueza con que en aquel momento planteé mi oposición a aprobar esas leyes, debo decirles que ésa fue una salida y una solución porque hoy nos permite estar consolidando la democracia. Por eso considero que fue una cuestión de estricta necesidad, como lo dijo Raúl Alfonsín. Estábamos en debilidad de posiciones, no solamente el gobierno sino la democracia.

Hoy, la mayor alegría es poder votar la derogación de estas leyes. Este es el proceso democrático de maduración de la sociedad argentina. No lo estamos haciendo porque de golpe nos encontramos en el recinto para resolver el tema, sino porque la sociedad en su composición absoluta nos está marcando los rumbos y fundamentalmente los tiempos de la política. La sabiduría del pueblo va delante de los propios dirigentes; va intuyendo e interpretando los tiempos y nosotros hoy le estamos dando sanción a ese mandato de la sociedad. Porque no es casualidad que después de 22 años lo estemos discutiendo. Esto se fue sedimentando y haciendo un hecho racional, además de emocional.

Tenemos una deuda pendiente. No tengo dudas de que cada uno de los que están aquí sentados, de alguna manera, se siente con cierta frustración por no dar toda la respuesta que la sociedad está esperando de los hombres de la política. Porque también somos conscientes de que la democracia no es solamente para que nos podamos sentar aquí quienes hemos sido privilegiados por el voto de nuestro pueblo. También es para dar respuesta a las demandas vitales de la sociedad; tenemos que trabajar en esa dirección y no señalando a quien tiene más culpa. Yo estoy convencido de que la sociedad está harta de vernos discutir para ver quién tiene más culpa y está deseando ver quién tiene más soluciones.

Si realizamos el debate para apoyar las soluciones de nuestra sociedad estaremos no solamente votando estas leyes sino marcando un nuevo tiempo en la Argentina.

Por eso es que ante esta historia desgraciada que nos tocó vivir, con la pérdida de tanta gente, con el dolor de las madres que no saben qué ha pasado con sus hijos, y de las abuelas, con todo el horror que vivió la sociedad argentina, con todo lo que hemos pasado, con toda la frustración de una generación que de alguna manera fue tomada por esta discusión, donde el campo de la violencia parecía el campo de la respuesta, hacen falta partidos políticos que canalicen el debate pluralista y pacífico en el ámbito de sus instituciones para que se pueda ratificar una vez más que en la paz y en la convivencia se van a ir



forjando las nuevas dirigencias que irán interpretando los nuevos tiempos de nuestra República.

Señor presidente, señores senadores: al expresar en nombre de mi bloque la recordación y el repudio al golpe de Estado de 1976, quiero dejar ratificado una vez más el compromiso histórico de este partido de 100 años, que es el de seguir luchando por la democracia y por el fortalecimiento de las instituciones.

**Sr. Presidente (Menem).** – Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del Partido Justicialista.

**Sr. Pardo.** – Señor presidente: ayer escuché que la reflexión que el señor presidente quería imponer para el día 24 de marzo era por sí un hecho demostrativo de una posición. Pensé en ello y resolví cambiar el tono de mi discurso y tratar de hacer una reflexión historiada y sintética de lo que realmente ha devenido a través del tiempo de ese infausto día. Y lo quise hacer así para evitar que la pasión superara a la razón.

Hoy no es un día cualquiera. Hoy es 25 de marzo; un día después de la fecha que recordamos en este momento. Es perfectamente normal recordar los aniversarios cuando éstos representan hechos trascendentes e importantes en el desarrollo nacional y en el impulso positivo de la historia.

Es más difícil recordar aquellos hechos que irrumpen en la vida de los pueblos produciendo un quiebre de dolor y de angustia. El 24 de marzo de 1976 se recuerda justamente por el dolor, para que no tengamos que recordar, en el futuro, otro acontecimiento similar. ¡Nunca más!

Pasaron 22 años de aquel triste amanecer en que los tanques, surcando las calles de la patria, la golpearon mortalmente y cambiando la Constitución por un estatuto, reemplazaron el poder legítimo del pueblo por el poder tiránico de las armas. Imaginamos entonces, junto a la bandera nacional, un crespón negro que nos enlutó por largo tiempo.

Toda la sociedad civil argentina sufrió el dolor de aquellos años de persecución, de cárcel, de exilio, de muerte, de división de los argentinos. Sin querer olvidar a nadie, sin desconocer la lucha de otros, tenemos que decir que fuimos los peronistas quienes dijimos la verdad sobre los desaparecidos a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, cuando algunos callaban en una omisión cómplice y otros, los más audaces, participaban siendo funcionarios del proceso, inspiradores o ejecutores de las órdenes que terminaron en el genocidio de miles de jóvenes, la mayoría peronistas, que no tenían nada que ver con la subversión.

También hay que decir como homenaje a todos mis compañeros, que los dos principales actos de resis-

tencia organizada, la huelga general de abril de 1979 y la movilización del 30 de marzo de 1982, fueron convocados por estructuras justicialistas.

**Sr. León.** – Disculpe, pero no es así, señor senador.

**Sr. Presidente (Menem).** – Señor senador León: pida la interrupción.

**Sr. León.** – La Multipartidaria convocó a la movilización del 30 de marzo...

**Sr. Pardo.** – Ahora bien, sin importar partido ni militancia específica, quienes enfrentamos el horror más de cerca, cara a cara, por haber sufrido las consecuencias en propia carne o por haber soportado la congoja de llorar en silencio la desaparición o la caída de un compañero peronista, si realmente somos justos, debemos reconocer el trabajo realizado por los hombres que desde 1983 hasta hoy condujeron los destinos de la Nación, pacificándola, uniendo donde había odio y división y encauzando la vida de los argentinos hacia un destino de grandeza.

Lejos estaba de creer hace muy pocos años que los hombres de armas estarían como lo están hoy, subordinados a la Constitución y al poder político, realizando y compartiendo la gestión del Estado en sus funciones como siempre debió ser, en la mejor tradición sanmartiniana y en la causa universal de los pueblos libres.

Quiero destacar la autocrítica seria y responsable de las fuerzas armadas, dando un paso más en la tarea invaluable de integrar a los argentinos. El olvido o el perdón son actitudes personales en las que nadie puede influir. Reconciliar el presente para imaginar el futuro es una tarea de todos.

Vaya por eso mi homenaje no sólo a quienes sufrieron las consecuencias del infausto proceso sino también a aquellos que construyeron y construyen todos los días una Argentina de paz y de grandeza.

**Sr. Presidente (Menem).** – Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires del bloque del Partido Justicialista.

**Sr. Caffero.** – Señor presidente: más que hacer referencia al aniversario...

**Sr. León.** – ¿Me permite...?

**Sr. Presidente (Menem).** – Señor senador Caffero: disculpe, pero me parece que el señor senador León quiere pedirle una ligera interrupción.

**Sr. Caffero.** – Cómo no.

**Sr. León.** – Gracias.

**Sr. Presidente (Menem).** – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** – Aclaro que todo lo doloroso de este proceso no fue casi partidario.



El entonces presidente del Partido Justicialista, Deolindo Bittel, se reunió con el doctor Balbín antes del golpe del '76 y todo fue bastante coordinado, a punto tal que en la víspera de la atención a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA representantes de los dos partidos realizaron una reunión. Luego, todo se hizo buscando una síntesis.

No quito mérito alguno al Partido Justicialista. Pero más allá de lo actuado por nuestro partido y por el justicialista, no podemos olvidar la acción de otras corrientes políticas. Esta circunstancia llevó a la formación de la Multipartidaria, que realizó algunas declaraciones y que, en alguna medida, fue la conducción de la resistencia al proceso.

**Sr. Presidente (Menem).** – Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** – Señor presidente: a propósito del hecho que menciona el señor senador por el Chaco no quiero reabrir debates del pasado.

La vivencia que tengo de aquel tiempo es que existía una manifiesta reluctancia a condenar los hechos que estaba produciendo la dictadura militar.

Se escuchaban voces como éstas: "Hay que respetarlo a Videla porque es un general democrático"; "Los desaparecidos están todos muertos".

En pocas palabras, señor presidente: honradamente debo decir que no creo que la actitud del justicialismo de alguna manera pueda compadecerse con la de otros sectores políticos a los que, obviamente, respetábamos y respetamos. Pero el peso de la resistencia –aunque fuese anímica– de la sociedad civil frente a la dictadura militar lo llevó sobre sus espaldas el pueblo justicialista.

El pueblo justicialista, señor presidente, al que veo –con no poco escándalo– se le quiere atribuir responsabilidad, alegando un decreto de octubre de 1975 firmado por el entonces presidente de la Nación en ejercicio, doctor Italo Luder, y suscrito por el vicepresidente de la Cámara, doctor Ruckauf, y quien habla como miembro de ese gabinete.

He visto, señor presidente, que en la Cámara de Diputados se ha querido atribuir a ese decreto una cierta anuencia o complicidad con la represión que se sucedió después de ese golpe de Estado.

Ese decreto establecía lisa y llanamente, señor presidente, que ante la escalada subversiva que se vivía en el país se instruía a las fuerzas armadas para aniquilar la acción subversiva y no a la subversión como se ha querido decir; no a los subversivos, como se ha querido indicar. Porque en los términos del lenguaje operativo militar, "aniquilar la acción subversiva" significaba despojar al adversario de capacidad operativa. Y ese decreto se dictó con el Parlamento en funcionamiento; cuando la prensa trabajaba con

absoluta libertad y las instituciones jugaban a pleno en la República.

Se trató de reprimir con la ley en la mano, señor presidente; no como se hizo después.

Quiero que esto quede en claro porque no nos van a convertir a quienes fuimos víctimas de este proceso en victimarios.

Señor presidente: más que referirme a marzo de 1976 quiero reproducir la atmósfera que vivía el país durante esos días de abril de 1987, en ocasión de dictarse una de estas dos leyes. Quiero hacerlo no para reabrir un debate que ya debe estar clausurado, sino porque cada uno de estos episodios es –o debe ser– aleccionador con respecto al futuro.

Creo que ese día los demócratas equivocamos el rumbo en la República.

Todos sabemos que la Unión Cívica Radical ganó las elecciones en 1983 y que en su plataforma sostenía la necesidad del juicio y castigo a todos los culpables por la violación de derechos humanos ocurrida durante la dictadura. Esto da lugar al juzgamiento de los jefes militares emblemáticos.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Carlos F. Ruckauf.

**Sr. Cafiero.** – Pero cuando se trata de llevar el proceso a las jerarquías menos emblemáticas, aparecen los proyectos de ley de obediencia debida y de punto final. Es cierto –yo lo recuerdo– que se había suscitado una rebeldía militar; algunos oficiales llamados a comparecer ante los jueces se negaban a hacerlo y se refugiaban en los cuarteles. Había un estado de sublevación y de levantamiento militar contra las órdenes de un poder legal, como era el que investía el doctor Alfonsín.

Recuerdo aquel 19 de abril de 1987, cuando la rebelión se trasuntó en la toma de cuarteles y en el acantonamiento de Campo de Mayo. Ahí se produjo un punto de inflexión en la historia política de los argentinos. Seguramente, estoy trayendo a mi memoria algunos recuerdos de mi compañero de la Sota, con quien actué en conjunto en aquel episodio.

¿Qué hizo la oposición aquel día? Era tradicional que cada vez que se sublevaba un militar la oposición iba a ponerse detrás de él "por las dudas". Esa es la historia de los golpes del 30, del 43, del 55, del 62, del 66. Pero los peronistas tomamos otra actitud: nos fuimos a la Casa de Gobierno, nos pusimos al lado del presidente de la República y le dijimos: "Usted tiene todo nuestro partido comprometido con la continuidad y la legalidad de su gobierno. Actúe como mejor le convenga a los intereses de la República." Con él fuimos a Campo de Mayo; con él penetramos en los cuarteles y en los lugares donde se alojaban

los oficiales rebeldes. A él lo alentamos para que pudiese coto a esa escalada militar, porque ya no estaban en juego la salud o la subsistencia de un partido político, sino los valores de la democracia.

Así, el presidente Alfonsín pudo llegar a la Plaza de Mayo —le pido al señor senador de la Sota que si le viene a la memoria algún otro recuerdo me lo indique—, donde la ovación de la gente fue indiscriminada, sin distinción de banderías políticas. Por primera vez los argentinos nos habíamos dado la mano para resistir una nueva y desgraciada intentona militar. Pero aquel día se dijo aquella frase, tal vez contradictoria —no quiero ser crítico de la figura de Alfonsín porque lo respeto y lo estimo como hombre público—, de que “la casa estaba en orden”. Y la casa no estaba en orden: se había empezado a desordenar aquella misma tarde. Mientras nos abrazábamos jubilados en la Plaza de Mayo comenzaba un proceso de reversión que se iba a exteriorizar con el envío de los proyectos de ley de obediencia debida y de punto final.

Es cierto que eran tiempos difíciles. Tal vez, podemos parecer a veces poco comprensivos con respecto a la realidad que nos tocó vivir. Pero, a mi entender, aquello fue un signo de tremenda debilidad de la democracia: habíamos ganado en las plazas, habíamos sometido a los rebeldes, y después de ello le ofrecíamos ese puente de plata que, para muchos, significaba el comienzo de la impunidad en la Argentina.

En el debate advertimos que había un doble mensaje para la sociedad: por un lado, se hablaba de justicia y verdad y de castigo a los culpables y, por el otro, se sostenía que había que buscar una solución política.

Nuevamente, la sociedad del miedo y de la libertad condicional había resurgido entre nosotros. Recuerdo que en el debate sobre este tema dije que había dos memoriosas experiencias en la historia sobre lo que significaban las leyes de amnistía encubierta y traje a colación que los asesinos de Julio César lograron en el Senado romano una ley de amnistía para los victimarios. Pero la plebe, ayudada —y no seguramente en poca medida por las legiones de Octavio— logró que ese mismo Senado no sólo reviera o negara la ley de amnistía, sino también que acusara, juzgara, condenara y apresara a los amnistiados de ayer. Si bien es cierto que sabíamos que el presidente Alfonsín no iba a hacer como Luciano Bonaparte en el famoso episodio de los tormentosos días de la Revolución Francesa, cuando hizo apresarse al Parlamento por las tropas y de esa manera lo disolvió, sabíamos que en la puerta de nuestro Congreso no nos estaban esperando los granaderos. Pero teníamos la sensación de que nuevamente el miedo había comenzado a regir la actitud de los legisladores.

Señor presidente: discutimos aquella ley. Sostuvimos cómo era posible que esa ley no condenara los crímenes atroces y aberrantes, cómo dejaba incluido dentro de la obediencia debida algo que el derecho penal reputa como absolutamente inadmisiblemente e imperdonable: los crímenes atroces. Cómo podía ser posible que la ley excluyera de la obediencia debida a aquellos que se han apoderado de bienes físicos en forma irregular y, en cambio, no hacía esta misma excepción para quienes habían apresado y tomado como propios los cuerpos humanos. ¿Acaso lo humano era menos importante que lo material?

Decíamos estas cosas y nuestras previsiones, diez años después, no fueron vanas. O sea, nuestro intento de que estas leyes no se votaran no fue una decisión movida por cálculos electorales o políticos. En definitiva, esta ley no sirvió a los fines de lo que se pensaba; no llevó pacificación al cuerpo social de la República.

Quiero decir algo más para que se vea que muchas actitudes de nuestro gobierno justicialista no fueron tomadas de forma descolgada de la realidad.

Si bien me opuse a la sanción de estas leyes y el debate fue tenso y fuerte, también dije que, antes de esta amnistía encubierta y antes de la sanción de esta ley de la impunidad, era preferible que el Poder Ejecutivo acudiera a los indultos selectivos. Sostuve que era más propio, más cabal y valiente, si se tenía la conciencia de que había razones para ello y mediaba el arrepentimiento, dar esta gracia del Poder Ejecutivo antes que sancionar una ley ajurídica que instalaba la impunidad y que, además, no iba a llevar a la pacificación, objetivo seguramente perseguido por aquella ley.

En suma, señor presidente, estas leyes las debemos derogar no sólo por su articulado impropio para una democracia madura como la que pretendemos construir, sino porque también son el último símbolo de la debilidad de la democracia, de una democracia que no sabe hacer frente a las exigencias de los tiempos políticos que se dan en la vida de una nación.

En definitiva, señor presidente, han pasado diez años, pero la conciliación entre la sociedad militar y la sociedad civil ha llegado. Nuestro gobierno puede atribuirse gran parte de esta tarea. Hoy los militares, para quienes tenemos memoria histórica, reconocen por primera vez subordinación al poder civil.

La sociedad militar tiene nuevas funciones, estrategias y cometidos en la vida de los argentinos. El reconocimiento de que jamás volverán a ser instrumento de impulsos golpistas, que tanto daño le hicieron a la República en los últimos cuarenta años, no es solamente del general Balza en nombre del Ejército, sino que también se extiende a las otras fuerzas

armadas. Por eso, pienso que la pacificación está cerca o, por lo menos, está instalada.

Hay otras fuerzas armadas y hay otra sociedad política mucho más madura.

Es por ello que lo que estoy diciendo es más bien un llamado de atención como experiencia aleccionadora de cómo debe funcionar la democracia y cuál debe ser el valor de las grandes coincidencias nacionales.

Aquella plaza del 19 de abril fue la plaza del pueblo de la República; del pueblo unido más allá de las banderías políticas. Significó la unión de oposición y gobierno en resguardo de la Constitución. Juntos fuimos a los cuarteles, juntos desarmamos a los rebeldes y juntos aclamamos en la plaza el triunfo de la democracia. Que eso nos sirva como lección, señor presidente.

Creo que van a venir tiempos difíciles para la democracia argentina —esperemos que no lo sean tanto—, porque más allá de la obediencia debida y del punto final, tenemos otros desafíos que superar, que hacen a nuestro futuro como Nación.

¡Ojalá podamos reproducir el espíritu del 19 de abril! ¡Ojalá que la experiencia que ese día capitalizó la democracia nos sirva como ejemplo aleccionador para las decisiones que debemos tomar en el futuro! *(Aplausos.)*

**Sr. Presidente.** — Están anotados los señores senadores Villarroel, Berhongaray, Galván y Alasino.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente...

**Sr. Presidente.** — ¿Lo anoto, senador Avelín?

**Sr. Avelín.** — Estoy confundido, porque hay dos aspectos...

**Sr. Presidente.** — Le cuento exactamente lo que hablé con el senador Menem al respecto.

Ahora vamos a terminar el tratamiento del tema en consideración. A posteriori, a pedido de alguno de ustedes y con la votación de los dos tercios, voy a habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de derogación de las leyes.

En este momento se está rindiendo un homenaje que sirve como fundamento para la votación posterior. Para no cometer un error reglamentario, una vez que los oradores anotados hagan uso de la palabra, voy a hacer habilitar el tratamiento del tema con el voto de los dos tercios y luego pasaremos a la votación del proyecto de derogación de las leyes.

**Sr. Avelín.** — Entonces me anoto para poder fundamentar el tema antes de pasar a la votación.

**Sr. Presidente.** — Muy bien.

**Sr. Maglietti.** — A mí también anóteme, señor pre-

**Sr. Presidente.** — Con los senadores Avelín y Maglietti damos por cerrada la lista de oradores. Están anotados los señores senadores Villarroel, Berhongaray, Galván, Avelín, Maglietti y Alasino. Luego de que hagan uso de la palabra, procederé a efectuar las votaciones reglamentarias que correspondan para habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de derogación de las leyes.

Pido a los señores senadores colaboración en el sentido de ser lo más limitados posible en sus exposiciones.

**Sr. Villarroel.** — Señor presidente...

**Sr. Presidente.** — Sé que no es a usted a quien se lo tengo que decir, sino a todos.

**Sr. Villarroel.** — Por supuesto.

Señor presidente: no renuncio al derecho de hablar. Simplemente solicito que por una circunstancia especial, en mi turno se conceda la palabra al señor senador Berhongaray.

**Sr. Presidente.** — Ningún inconveniente. ¿Usted pide que hable primero el señor senador Berhongaray y usted después, o prefiere hacer uso de la palabra en otra ubicación?

**Sr. Villarroel.** — Después del senador Berhongaray.

**Sr. Presidente.** — Muy bien.

**Sr. Alasino.** — No nos vayan a dejar sin quórum.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Berhongaray.** — Ante todo quiero agradecer al señor senador Villarroel que me haya cedido su lugar para hacer uso de la palabra.

Debo expresar la sorpresa que me causa el sistema de tratamiento conjunto de dos temas hartamente importantes, como lo son el repudio al golpe militar de 1976 y el análisis de la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida.

Si esto se ha acordado así, obviamente voy a aceptar las reglas del juego y a hacer más las palabras del señor senador Losada en todo lo referente al repudio del golpe de Estado de 1976.

A continuación voy a hacer algunas consideraciones relacionadas con el segundo tema. Digo "la sorpresa" porque me acabo de enterar, aquí en el recinto, de que vamos a tratar este tema. Y creo que tanto la profundidad de este asunto como todo lo que trae aparejado, requiere que tengamos un poquito más de respeto entre nosotros mismos para acordar con el debido tiempo la posibilidad de juntar los muchos papeles de tantos años en los que estuvimos hablando, analizando, viviendo y sufriendo estas cosas. Pero ahora las circunstancias nos ponen súbitamente a tener que hacer algunas reflexiones.



No sería un hombre de bien si no reafirmara los conceptos vertidos por el señor senador Cafiero respecto del decreto llamado de aniquilamiento, de Luder. Lo definió en los términos en que exactamente correspondía ser definido.

La orden de aniquilamiento significaba ni más ni menos que el restar toda capacidad operacional a los grupos subversivos. Quizás podríamos calificar de imprudente el término, pero nunca de violento ni de antijurídico.

Digo imprudente porque ya desde 1966 había una clara decisión de militarizar la política argentina. Militarizar en los términos en los cuales el general Onganía comenzó a introducir el concepto después de recibir sus instrucciones de West Point —la academia militar de los Estados Unidos—, con la famosa doctrina de la seguridad nacional.

La fuerza del pueblo logró recuperar la democracia, pero esa cultura de la militarización siguió avanzando y entonces no importaron los aciertos o los errores. Las decisiones estaban tomadas y vino el golpe del 24 de marzo de 1976. Lo que pasó hasta 1983 es historia por todos conocida.

No vamos a hacer un campeonato de quiénes tuvieron más responsabilidades, más heridas, más sangre o más muertos. Considero que sufrió toda la República.

Si estamos absolutamente convencidos de que, para ser ecuanímes en el tratamiento del tema al cual voy a referirme, que es la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida, no podemos dejar de considerar las circunstancias que vivió el país, no digo desde 1983 sino desde 1966.

Es cierto lo que acá se dijo —y no pude escuchar mucho porque estaba tratando de reunir rápidamente algunos papeles— acerca de que la situación en términos políticos era de muy difícil gobernabilidad.

Es cierto que estaba ocurriendo algo más importante que los intentos de asonadas, motines o rebeliones que nos tocó vivir. Estábamos presenciando la pérdida de la sacralidad del poder político, que consistía en no poder hacer comparecer ante la justicia a aquellos a quienes se citaba.

Aquí se ha recordado a los militares que se metían en los cuarteles, a los jueces que no podían hacer cumplir sus órdenes y al estado de derecho que se derrumbaba.

Y después comenzó el proceso de 1983 con una mística, una euforia y una alegría como las que vivimos al sancionar leyes como la 23.049, de reforma del Código de Justicia Militar, en donde eliminamos los bandos, la posibilidad de que los civiles puedan ser juzgados por tribunales militares; logramos que

para que los militares también por delitos comunes tuvieran que comparecer ante la justicia civil como cualquier otro ciudadano e impusimos el concepto de ciudadano con uniforme cuando nos referíamos a los militares.

A los pocos días sancionamos la ley que equiparaba al torturador con el homicida. Fuimos ratificando los convenios internacionales sobre derechos humanos y la Convención de San José de Costa Rica.

Fuimos haciendo leyes, las más avanzadas que existían en el país; pero nos encontramos con la realidad al ver cómo el estado de derecho se encontraba en circunstancias en las cuales se volvía inmanejable.

Estábamos convencidos de que había que terminar con la impunidad para siempre, y lo intentamos. Intentamos por todos los medios avanzar lo más lentamente posible, de acuerdo con lo que creíamos que las circunstancias nos permitían. Y entonces dijimos: bueno, con las instrucciones a los fiscales va a alcanzar. Y no alcanzó.

Establecimos la ley de punto final que decía: bueno, hay un plazo de caducidad perentorio, sesenta días para que todo aquel que tenga alguna denuncia penal que realizar por hechos vinculados a la represión los haga, y a partir de ese momento que desaparezca la espada de Damocles que existía sobre tantos militares, que no sabían si iban a ser juzgados o no. Algunos estaban convencidos de que eran responsables; otros tenían temor de que por encubrimiento, complicidad o algún grado de participación pudieran llegar a quedar involucrados en esos hechos.

Y yo, que en ese momento presidía la Comisión de Defensa y tenía que entrar a los cuarteles, les puedo asegurar que era absolutamente difícil la situación. El clima estaba totalmente enrarecido. Había situaciones de Estado que nos llevaron a hacer lo que no queríamos, es decir, sancionar la ley de obediencia debida, porque la de punto final no obtuvo ningún resultado; al contrario, fue un bumerán que se nos vino en contra: ese plazo de sesenta días motorizó todos los procesos. Todos los fiscales y los jueces que habían estado prácticamente dormidos frente a las causas, se pusieron en movimiento. Más de seiscientos casos aparecieron en ese tiempo y, en total, hubo más de 2.000 militares en actividad armados involucrados, muchos de ellos integrantes de familias de militares que tenían a sus hijos también dentro de otros cuarteles.

Entonces, se planteó el famoso tema de la ética de la responsabilidad. Frente a esa situación, ¿qué hacíamos? Hicimos lo que no queríamos: sancionar la ley de obediencia debida, estableciendo una presunción *iure et de iure* —sin admitir prueba en contrario— según la cual todos aquellos que revestían grados militares de teniente coronel —inclusive— para abajo,

habían actuado por obediencia debida. Fue duro. Ya lo dijo alguna vez el ex presidente Alfonsín: frente al tema de los derechos humanos del pasado, se presentaba el tema de la supervivencia de los derechos humanos del futuro. Esa era la disyuntiva en que nos encontrábamos todos los argentinos.

Sé que lo que estamos diciendo no fue por todos compartido. Desde la oposición se levantaron muchas críticas; desde nuestro propio partido se levantaron voces críticas. Muchas. Es que lo que estábamos haciendo era un acto de cirugía mayor. ¿Y qué padre, qué hermano, qué madre puede alegrarse ante un acto de cirugía? A veces se hace, porque no queda más remedio. Y a veces nos equivocamos y el enfermo se nos muere en el quirófano. Gracias a Dios, este enfermo no se nos murió en el quirófano. Sangró mucho, quedaron heridas y cicatrices, pero el enfermo empezó a caminar de a poquito y siguió andando. Hoy sigue haciéndolo: es esta democracia que hoy seguimos construyendo.

Ahora venimos a derogar esas leyes. En términos jurídicos, diría que están agotadas. No existen. La ley de punto final, que como decíamos estableció un plazo de sesenta días para efectuar las denuncias, fue absolutamente agotada en ese momento. Se extinguió sola y rápidamente.

La ley de obediencia debida remitía su ámbito de vigencia temporal al inciso 1° del artículo 10 de la ley 23.049, que es la ley que reforma el Código de Justicia Militar. Ese inciso decía que comprendía a todos los hechos vinculados con la represión ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 26 de septiembre de 1983, que fue el día en que se sancionó la ley de autoamnistía. Ese fue el plazo que se tomó en todas las leyes vinculadas con la represión y la violación de los derechos humanos.

La eximente de obediencia debida solamente cubría a esos hechos, por la presunción *iure et de iure* que hemos señalado. Un hecho cometido durante el gobierno anterior, previamente al 24 de marzo, por más atroz y aberrante que hubiera sido, no estaba amparado por esa eximente de la obediencia debida. Un hecho cometido después del 26 de septiembre de 1983, aunque fuera inmediatamente después, no estaba amparado por la eximente de la obediencia debida. En efecto, reitero, ésta era sólo para ese lapso de vigencia y para el personal que había actuado operativamente de acuerdo con los planes tipificados en la ley 23.049. En consecuencia, podíamos decir que esta ley estaba virtualmente agotada y derogada de hecho en los tiempos.

Después, sancionamos la ley 24.556 —promulgada el 11 de octubre de 1995—, que ratificó el Convenio sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuyo artículo 8° se dice que no se admitirá la eximente de

la obediencia debida a órdenes e instrucciones superiores que dispongan, autoricen, o alienten la desaparición forzada de personas. Toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el deber de no obedecerlas. Esta es una ley de la Nación.

Es decir que, reitero, la llamada ley de obediencia debida estaba virtualmente agotada en el tiempo; su vigencia temporal había terminado; y la ley 24.556, de 1995, terminaba con la expectativa de cualquiera que quisiera invocar la supervivencia de aquella norma.

Entonces, ¿por qué estamos acá derogándola? Porque podríamos pensar que, análogicamente, algún juez tal vez la aplique en forma equivocada. De todas maneras, nosotros sabemos que jurídicamente ello no es posible, porque en derecho penal rige el principio de la ley penal más benigna, que aquí se mantiene y que está contenido en el artículo 2° del Código que rige esta materia.

A nuestro entender, estas leyes han terminado absolutamente desde el momento en que se acabó el ámbito de aplicación temporal de estos delitos.

Estas son las pequeñas reflexiones que quise hacer sobre el tema, porque creo que valían la pena.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Villarreal.** — Señor presidente, señores senadores: quiero señalar que esto no me es grato. Comparto algunas de las expresiones que acaba de hacer quien me precedió en el uso de la palabra y me parece una suerte de mezquindad entablar con motivo de este tema que nos convoca una suerte de contabilidad político partidaria, a fin de establecer presuntos superávit o déficit de oposición en su momento al golpe del 24 de marzo de 1976, o con relación a las víctimas de la represión, o a lo que significaron oportunamente estas leyes, a las que se están refiriendo de manera indirecta, porque todavía no llegó el momento de considerar estos temas.

Yo simplemente señalo que he leído el debate sobre la ley de punto final, que sugestivamente tuvo entrada por este Senado, en donde el gobierno del presidente Alfonsín contaba con minoría, y aquí fue sancionada.

Creo que en realidad está ocurriendo algo que alguna vez don Miguel de Unamuno supo expresar con su genialidad. El dijo que el hombre sólo tiene oportunidad de predicar la verdad cuando habla de sí mismo. Yo creo que es así. Me parece que, de alguna manera, los discursos que hemos oído responden —aunque quizás no sean conscientes de ello quienes los han vertido— a esa observación de Unamuno.

Yo, que sí soy consciente de la verdad de esa afirmación de Unamuno, puedo decir exactamente que

desde ese 24 de marzo de 1976 me dediqué exclusivamente al ejercicio de una abogacía militante. Digo militante porque la defensa del derecho es una militancia y porque esa defensa del derecho me llevó también a defender en mi provincia a la mayoría de los perseguidos de entonces.

Y más que eso, señor presidente, porque en rigor de verdad había pocas oportunidades de defenderlos ya que la mayoría de ellos no tenía proceso; ni siquiera tenían el famoso decreto de "a disposición del Poder Ejecutivo Nacional" que, de algún modo, les garantizaba la vida. Por lo tanto mi tarea de abogado era algo lateral en el sentido de abogar para que algunos sí aparecieran en el decreto y dejaran de ser detenidos en negro, y para que los pocos que estaban sometidos a proceso contasen con la asistencia profesional necesaria.

Ese ejercicio de mi profesión —que seguramente ha sido mi vocación más profunda, y que continúa siéndolo por sobre el oficio político— es el que me permitió confrontar cara a cara cuánto significó el dolor y la soledad en las víctimas y en sus allegados y cuánto dolor uno pudo experimentar frente a tantas actitudes de indiferencia, de levantar los hombros y de hacerse los distraídos que se dieron en mucha gente, de todas las militancias. Preferían —como suele ser habitual en nuestras sociedades— no ver el meollo de la cuestión.

Y el meollo de la cuestión no es un tema político y mucho menos partidario. Ni siquiera es un tema de derecho constitucional. El meollo de la cuestión es un tema moral y, justamente por eso, porque es una cuestión moral ahora no sólo nosotros sino el mismo pueblo de la República no tiene más remedio que afrontarla; esa es la verdad.

Esa cuestión moral tiene, digámoslo así, una cosa precisa. Durante la dictadura militar se modificó el Código Penal y se estableció por primera vez dentro de nuestra ley penal común la pena de muerte, y en los fundamentos de la CAL —que sustituía a este cuerpo aquí, justamente en este recinto— se dijo que precisamente se incorporaba la pena de muerte en orden a estos fenómenos de terrorismo. Y hete aquí el problema moral: los responsables de ese gobierno jamás firmaron una condena de muerte, y sin embargo se mataba. Esta es la cuestión.

De otro modo, si se hubieran hecho responsables quizás el juicio podría haber sido más matizado. No lo puede ser en absoluto porque, insisto, no asumieron su responsabilidad como hombres, como personas, de decir: "Yo condeno a muerte", o "Nosotros condenamos a muerte". Esa es la verdadera cuestión; esa es la cuestión moral ineluctable y que, por fortuna, ahora renace en el pecho de la inmensa mayoría

Desde ahora, desde este momento, desde este 25 de marzo de 1998 es muy fácil discurrir acerca de si estuvieron bien o mal la leyes de obediencia debida y de punto final. Alguna vez Ortega y Gasset, citando a un filósofo alemán, dijo que los historiadores —y éste era un historiador— son profetas del pasado. Aparenta ser una paradoja pero, en realidad, es una profunda verdad.

A lo lejos es fácil juzgar. No me animo a juzgar. Además, no me tocó la responsabilidad de participar en algún debate; no era legislador en aquella época. Así que me parece prescindible ese tipo de consideraciones y, además, que no guardan la debida relación de importancia axiológica —pido disculpas por la palabra, que parecería rebuscada— con ese luto, ese llanto y ese dolor de entonces.

Prácticamente está expuesta la cuestión de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas en la Cámara de Diputados. Confieso que no he podido leer la iniciativa; no tengo un ejemplar en las manos. Pero me parece innecesario, porque entiendo que no es un proyecto con virtualidad jurídica.

Carece de virtualidad jurídica porque ambas leyes agotaron su contenido, por el transcurso del tiempo y de las circunstancias. Además, una eventual aplicación retroactiva de esas leyes —que algunos han insinuado por ahí— no sólo choca con el artículo 2º del Código Penal —si fuera esto, tal vez podría derogarse este artículo— sino también con un precepto de entidad constitucional. Porque si no recuerdo mal —no tengo papeles a la vista; estoy improvisando—, choca con el artículo 9º del Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos, que consagra expresamente este principio que hace valer la retroactividad o ultraactividad, en todo caso, de la ley penal más benigna. De modo que la norma carecería de toda virtualidad.

Sobre la presunta anulación —que conozco de oídas, porque ayer no tuve tiempo de ver por televisión el debate en Diputados— quiero decir lo siguiente. El único caso que conozco en que se aceptó la constitucionalidad de la anulación de una ley fue el pronunciamiento de la Corte respecto de la célebre autoamnistía del gobierno del proceso militar. La razón de la nulidad fue, precisamente, que no cabía darle entidad de ley a una norma que significaba beneficios directos para quien la dictaba. Así fue la cosa, dicho en términos bastante gruesos.

De manera que esto —sé que se ha discutido y que en definitiva no triunfó incorporar la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final— también es inaceptable desde el punto de vista constitucional, por la teoría que hace a quien ejerce el con-



rol final de la Constitución y por el papel del Parlamento.

Creo que con estas muy pobres palabras, con las que de alguna manera estoy hablando de mí, queda cumplida la responsabilidad que me corresponde en esta instancia.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja:

**Sr. Galván.** — Señor presidente: si me fuera dado ser un hombre ambicioso, mi mayor ambición en este momento sería la de tener poder de síntesis y de improvisación. Porque en esta jornada del 25 de marzo vine con espíritu de unción a rendir un homenaje a las víctimas de aquel golpe de Estado que bien se ha caracterizado por los oradores preopinantes.

Comprendo que frente a la exaltación de méritos propios, a veces se tiende algún manto oscuro sobre el comportamiento de otros.

Creo que cada partido político ha hecho un honrado esfuerzo para vencer a la dictadura. Pero en nombre de mi partido debo decir que la Unión Cívica Radical hizo todos los esfuerzos para que el golpe no tuviera lugar y se reivindicara la democracia.

Aquí se hizo mención a palabras de Ricardo Balbín. Es verdad, de Videla dijo "este es un general de la democracia". Cuando como secretario del Comité Nacional le pregunté cuál era la razón de esa expresión me dijo que "lo quería contagiarse de democracia". Balbín también dijo "todos los desaparecidos están muertos", y la historia ha comprobado que fue así.

Voy a hacer una confesión histórica. Balbín también habló con Harguindeguy por los presos del país. Y a pedido de algunos dirigentes de La Rioja solicitó la libertad del actual presidente de la República.

Bien dijo el señor senador Villarroel: lo que no se dice acá o lo que se olvida —tal vez para bien— es que hubo abogados que hicieron la militancia abogadil en los tiempos duros para la democracia.

A veces los hombres de bien, por decoro, no mencionamos dónde hubo algunas presencias y dónde algunas ausencias. Pero no quiero volver a las antinomias.

Ricardo Balbín, ese venerable anciano de 78 años, preso en las provincias de Buenos Aires y de San Luis por luchar por la democracia, no puede ser disminuido. Está bien que hagamos los juicios, pero también debemos recordar la vivencia de esos tiempos, lo que a veces es difícil.

Fui un humilde colaborador del presidente Alfonsín en una tarea difícil, como subsecretario de Interior.

El hecho electoral y cívico de votar el 30 de octubre no fue suficiente para impedir que las paredes

poderosas de ese dique que contenía un charco de sangre se rompiera y para que la democracia lo reparara con una varita mágica.

Recuerdo que al día siguiente del juramento de Tróccoli se presentaron en el Ministerio de Interior los reclamos lastimosos y legítimos de las madres y de las abuelas. Ese era el drama argentino. Pero nosotros teníamos que cumplir una promesa, que significaba también una lección cívica para los pueblos del mundo. Así, enjuiciamos a las juntas responsables del golpe del 24 de marzo de 1976. Pero también enjuiciamos a la guerrilla. A título de anécdota voy a decir que me tocó traerlo preso a Firmenich, lo cual me fue encomendado por el presidente. Debí hacerlo porque tenía que triunfar la justicia y el derecho. Ese señor, que estaba amenazado de muerte, tenía que ser enjuiciado, y no matado.

Esos son los pequeños y grandes esfuerzos que hemos hecho.

Cuando se dictan las leyes de obediencia debida y de punto final existía un estado de necesidad. Los abogados saben que había que sacrificar un bien para defender uno mayor. No estaba tan fortalecida la democracia, señor presidente, porque los cuarteles estaban con los generales, con los coroneles y con las armas del proceso!

Nosotros necesitábamos fortaleza para salvar al proceso democrático de la República. En tal sentido, valoro el aporte del justicialismo en abril de 1987, como tendrá que valorar el justicialismo el que nosotros estuviéramos al lado del presidente Menem el 3 de diciembre de 1990.

Esas son las lecciones del pasado. Entonces, no se debe venir a hacer juicios. Los comprendo, los legítimos y no los objeto, pero había que vivir ese tiempo. Recordemos que empezó a funcionar la Conadep y que comenzaron a actuar las bandas armadas que todavía eran resabios del pasado.

Ese era el clima que vivimos durante el gobierno del doctor Alfonsín. El señor presidente Menem decretó el indulto de los responsables mayores de este descalabro institucional y humano que sufrió la república.

Este Senado no se reunió como sucedió en tiempos de César, según recordaba el senador Cafiero, donde el Triunvirato formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido hicieron rever la ley de indulto de Bruto, Casio y sus amigos.

Entonces, acá también hay situaciones que comprendemos. Por eso venimos al debate sin papeles, salvo uno que con motivo del homenaje me hizo llegar el señor senador León. Se trata de un documento del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical de junio de 1977, firmado por Balbín, Illia, Alfonsín, Luis León y otros. Intervinieron dos jueces federales,

a uno de los cuales veo ahí patrocinando estas grandes multinacionales, que se han hecho ricos con estas privatizaciones. Me refiero al doctor Giletta y al doctor Sarmiento. Tuvimos cuatro procesos los que firmamos esta solicitada en 1977; ahí nomás del golpe.

Algo hemos hecho. No queremos pasar a la historia, pero tampoco queremos quedar en el olvido, porque los hombres de la Unión Cívica Radical tenemos responsabilidades. Y hoy vamos a discutir sin debate este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados. Yo, por lo menos, no estoy en condiciones de hacerlo.

Estoy inspirado en un buen propósito, pero debo decir algo, señor presidente. Los señores colegas seguramente lo van a atribuir más a la improvisación que al deseo de que no ocurra lo que yo pienso que puede suceder. La sanción de este proyecto de ley puede abrir nuevos procesos en el país. Luego de la sanción de este proyecto de ley, frente a un dolor humano ninguna persona que tenga un ser querido desaparecido se va a acordar del artículo 2º del Código Penal. Si en este momento un juez español está atendiendo causas relacionadas con los derechos humanos, no sé lo que podrá pasar en el país.

Escuchaba con atención las profundas y levantadas reflexiones del señor senador De la Sota. Él decía que nosotros, los radicales, asumimos la sanción de las leyes de punto final y de obediencia debida en soledad. Es verdad. Estas son las responsabilidades de los que gobiernan.

Quiero hacer una honrosa advertencia. En las consecuencias de la aplicación de esta derogación tenemos que estar todos juntos. Quiero que el presidente Menem termine bien su mandato. Quiero que el próximo gobierno, cualquiera fuera, tenga el horizonte sin nubarrones. Pero tengo el deber de advertir que la derogación de estas leyes no será inocua. No quiero que se perturbe la democracia.

Y voy terminando, señor presidente. Quiero dejar estas preocupaciones en un debate sobre el que no estábamos anoticiados. No quisiera que mañana los argentinos tuviéramos que decir las palabras de Bruto, cuando en la batalla de Filipos, derrotado por Marco Antonio y por Octavio exclamaba: "Libertad, nombre vano, engañosa palabra, esclavo del destino, no creo más en ti". Porque ahí moría la república.

Entonces, que con esta ley nos ilumine Dios, que sea para la reconciliación y la verdad, para el derecho y la justicia y no para abrir las suturas que tanto han costado para unir al pueblo argentino después de tantas vicisitudes, dolor e incompreensión.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Avelín.** — Señor presidente: éste no es un tema para discursos —aunque los que se han pronunciado

fueron bastante buenos—, sino que se trata de una cuestión que obliga a la reflexión y nos lleva a preguntarnos qué hacer. ¿Cuál es el camino que debemos tomar? ¿Nos detenemos? ¿Seguimos mirando hacia el pasado y recogiendo heridas, sangre derramada en todo el país, frustraciones, intolerancia y desencuentros? ¿Qué debemos hacer, señor presidente?

Hay una Nación que nos espera a todos los argentinos; una Nación que por encima de los muertos, del recuerdo que de todos ellos debemos tener —sobre sus tumbas tendremos que derramar lágrimas de dolor, de angustia y del infortunio de muchas madres, abuelas y familias—, debe mirar hacia su futuro y disponerse a elaborar una esperanza de grandeza, de solidaridad y de respeto para todos sus ciudadanos.

Claro que hay mucho dolor. Todo dolor repercute en el alma, en el corazón y en el sentimiento; todo dolor hace reverdecer el pensamiento y los recuerdos, pero también debemos tener en cuenta que el dolor debe generar amor y un sentimiento que borre muchas heridas, aunque tengamos que recordarlas permanentemente.

La juventud que se está incorporando a la vida del país no tiene muchas de las culpas que tenemos nosotros; no debe pagar mucho de lo que nosotros tenemos que pagar. Ellos deben tener la esperanza y la luz que les permitan recorrer el camino que la Argentina espera, que la Nación necesita y que el pueblo argentino reclama.

¡Cuántas cosas debemos hacer! Necesitamos trabajo, justicia, dignidad, corrección; es preciso desterrar la corrupción y los privilegios, levantar al país en todos sus horizontes y aspectos, porque el pueblo argentino no sólo está constituido por los políticos, por los senadores o por los que han intervenido —o no— en causas que la historia registrará. Son muchos los obreros de las montañas y de las pampas, son muchos los agricultores, los industriales, los hombres de trabajo que esperan algo más y mejor, no para olvidar lo nefasto de algunos sucesos que han producido hechos de sangre en el país, sino para ver cómo recuperarnos y empezar a caminar por una ancha senda que dé claridad y ofrezca posibilidades.

Claro que hay muchas cosas que plantean dudas e incógnitas, pero creo que tenemos dos posibilidades: o bien nos quedamos detenidos o llorando un pasado desgraciado que todos sentimos y que a todos nos preocupa, o bien vemos la forma de levantarnos, unidos, todos los argentinos.

No es una cuestión que incumba exclusivamente a los partidos políticos —radicales, peronistas u otros— sino que se trata del alma argentina, que reclama solidaridad y posibilidades para construir una nueva esperanza relativa a este gran país que tenemos y que está descuidado. Claro que lo está.

El mismo presidente de la República habla de las tareas que hay que cumplir, de los asuntos que tenemos que sacar. Y debemos hacerlo. Ello constituye la tarea diaria, el desafío de todos y cada uno de los argentinos.

Por eso, mi reflexión es: no nos detengamos; no perdamos más tiempo. Recordemos lo sucedido para que nunca más vuelva a ocurrir, para que nunca más debamos sufrir en el corazón la llaga del drama del dolor de tantas madres y de tantos argentinos. Pero no detengamos nuestra marcha, porque ella es larga y difícil. Si no nos unimos, seguiremos trampeando a la historia y a las esperanzas de un pueblo sediento de aspiraciones y de posibilidades.

Argentinos: a unirse en el ancho camino del trabajo, que traerá la redención del pueblo, de la justicia, de la fe, de la transparencia en la conducta, de los principios, y de los valores más importantes: la moral y el sentimiento nacional.

No olvidemos que el destino del país nos espera, señor presidente. Recojamos de la historia la enseñanza de nuestros propios errores para así no volver a cometerlos.

Para lograr este objetivo debe prevalecer la hombría de bien, virtud poco común en los seres humanos pero sí propia de un gran sector del pueblo argentino. Gracias a esa hombría de bien será posible cumplir con la palabra empeñada para defender la democracia y la justicia y para proyectar la grandeza del país.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Maglietti.** — Señor presidente: quiero manifestar mi adhesión al homenaje que estamos rindiendo en este acto.

Al mismo tiempo, me referiré a este grave asunto traído de sorpresa al recinto a pesar de que —como han dicho otros señores legisladores— no tuvimos oportunidad de munirnos de los antecedentes necesarios ni de realizar los estudios pertinentes a efectos de una exposición responsable.

Reitero que esta situación me toma totalmente de improviso. Pero quise hacer uso de la palabra para ser justo con algunas apreciaciones vertidas anteriormente.

Así como nosotros asumimos la responsabilidad que nos pueda caber por la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, así como sostuvimos que nuestro gobierno, en esa circunstancia, se vio obligado a dictar esas normas para defender las instituciones del país y por interpretar que no existía otra posibilidad para continuar transitando por la senda de la democracia, también debemos apreciar la valentía con que actuó en aquel momento.

Digo esto porque si analizamos la historia de los países del mundo que recobraron su democracia después de soportar dictaduras, podremos afirmar con orgullo que ese gobierno radical fue el único en todo el mundo capaz de designar una comisión investigadora como la Conadep. Además, como bien dijo el senador Galván, fue el único gobierno del mundo que procesó y condenó a la cárcel a los máximos responsables: los comandantes en jefe. En consecuencia, interpretamos que las afirmaciones realizadas por el senador Cafiero son totalmente injustas.

No se trató de una muestra de debilidad de aquel gobierno radical sino de un signo sobre la tremenda necesidad de defender la democracia, que es algo totalmente distinto.

Un gobierno que llegó a la instancia de condenar a los comandantes en jefe durante la dictadura militar demostró cumplir con la palabra empeñada al pueblo y, además, el gran coraje de juzgar a las máximas autoridades responsables de los gravísimos actos violatorios de los derechos humanos cometidos en el país durante ese proceso.

Creo que en este recinto debemos ser equitativos y distribuir nuestras responsabilidades. Pregunto: si se dice que el gobierno radical, que sancionó a los máximos responsables, mostró un signo de tremenda debilidad, los indultos que fueron dictados por este gobierno, ¿de qué cosa fueron signo? ¿De tremenda debilidad? ¿De la buena voluntad por solucionar los problemas en el ámbito castrense, que se pueden justificar? ¿De la grave situación que se creó en el país y en las organizaciones de derechos humanos, que no aceptaron desde ningún punto de vista que se indultara a los máximos responsables de hechos tan gravísimos como los cometidos? No creo que sea éste el momento de hacer una crítica. No estoy criticando los indultos, ni mucho menos.

**Varios señores senadores.** — ¡No!

**Sr. Maglietti.** — Simplemente, estoy tratando de distribuir la carga de responsabilidades que tenemos todos. Acá, todos somos políticos y debemos asumir nuestras responsabilidades. Nosotros asumimos la responsabilidad que nos cabe por haber dictado las leyes de obediencia debida y de punto final. De la misma manera, el oficialismo debe asumir su responsabilidad por los indultos de los comandantes en jefe que dictó, lo cual es mucho más grave que lo que hizo el gobierno radical.

Acá se afirmó que gracias a la acción de este gobierno se terminaron los enfrentamientos por este problema dentro de la sociedad. Creo que no es así, señor presidente. Los enfrentamientos que pudieron haberse originado por la sanción de las leyes de obediencia debida y de punto final se agudizaron con los indultos. Ahora necesitamos buscar soluciones, y no



responsabilidades. No vengo aquí a buscar responsabilidades. Quiero contribuir aportando soluciones. Los argentinos necesitamos cerrar definitivamente las heridas que existieron en nuestro pasado. Necesitamos encaminarnos hacia un futuro en el que reine una democracia madura y no en pañales, en la que las instituciones se vayan fortaleciendo todos los días, en la que la Constitución sea sagrada para todos los argentinos y en la que nadie se atreva a violarla, porque ése es el hecho más grave que está acosando hoy al pueblo argentino.

Es evidente que llegó el momento de pensar en las consecuencias que traerán estas derogaciones. Por supuesto, todos coincidimos en que la derogación de estas leyes no tendrá efectos retroactivos. Pero hay quienes piensan lo contrario. Yo no comparto esa opinión.

Recién estuve analizando un artículo del diario "La Razón" que dice así: "...este paso adelante puedan reactivarse causas que parecían dormidas". Con esa postura coincidió el camarista federal Leopoldo Schiffrin, quien consideró que "podrían reabrirse las más de 500 causas cerradas por el imperio de la Obediencia Debida."

Ojalá que no ocurra nada de eso. No es el momento de volver al pasado y de reabrir todas las heridas que ha tenido el país por responsabilidades en ambos bandos. Los guerrilleros pusieron bombas, asesinaron y violaron los derechos humanos así como también los militares, mediante una dictadura, asesinaron a miles de personas sin juzgarlas, sin un tribunal y sin que nadie se atreviese a poner la firma, aunque más no sea en un tribunal castrense, condenando a muerte si es que así correspondía. Jamás debía haberse recurrido al artificio de hacer desaparecer personas porque se trata de un hecho absolutamente imperdonable.

Si en ese gobierno hubiera habido personas responsables y hubieran colocado sus firmas, probablemente la situación no sería la actual porque, por lo menos, el pueblo argentino sabría qué sucedió con los desaparecidos. Pero, lamentablemente, éste es uno de los problemas más graves que tienen los argentinos.

Entonces, si hay personas que creen que se pueden reabrir los procesos, ¿qué pasará con los indultos que, en mi opinión, no se pueden derogar? Son signos de interrogación que los argentinos tenemos la obligación de contemplar.

Como bien dijo el señor senador Galván, nosotros no le vamos a poner al gobierno ninguna piedra en la senda de la democracia porque si se trata de defender la Constitución estaremos firmemente encolumnados detrás de todos sus actos. Pero también dejamos en claro que en aquellos actos en los que el gobierno no

respete los principios constitucionales nos encontrará a los radicales y a los demás miembros de la Alianza ejerciendo la resistencia que establece la Constitución para la defensa de las instituciones del país.

**Sr. Presidente.** — El último orador es el señor senador Alasino.

La Presidencia llamará para votar y aclara que finalizadas las palabras del señor senador por Entre Ríos, se llamará por cinco minutos improrrogables y, de no haber quórum, se levantará la sesión.

—Se llama para votar.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: cuando comenzamos con este tema dije que, quizás, el mejor homenaje que podíamos hacer a los compañeros que alrededor del 24 de marzo de 1976 sufrieron las consecuencias del sistema impuesto por la dictadura militar era que, sobre tablas, acompañáramos la decisión que anoche tomó la Cámara de Diputados y nos dispusiéramos a sancionar definitivamente el proyecto que deroga las leyes de obediencia debida y de punto final.

Señor presidente, el 24 de marzo de 1976 el país entraba en una situación en la cual, por primera vez, sin tapujos y en forma totalmente abierta, surgían la persecución, el atropello y la muerte para quienes soñaban con que aún era posible construir un país para todos los argentinos.

Creo que el debate lo estamos dando por una imposición del pueblo argentino. He sido testigo de que prácticamente toda la dirigencia política era remisa a realizar esta discusión. Quizás, una de las razones estaba en que algunos pensaban que esto no importaba, que esto era una cosa del pasado, que a la gente le interesaban más las urgencias del día que este tema.

Por otro lado estábamos quienes no creíamos así y defendíamos el principio de esta discusión que culmina hoy con la derogación de estas leyes. Pero se hicieron algunas encuestas y, oh sorpresa, muchos se dieron cuenta de que ese tema seguía siendo importante para los argentinos.

En efecto, el pueblo argentino mantiene su memoria colectiva —que yo coloco, sobre todo, en cabeza de los jóvenes, que tal vez no vivieron ese período— la cual, como toda memoria colectiva, le ha sido transmitida, sin saber cómo, a través de los mayores. Son esos jóvenes los que han exigido que tratemos este tema y que tomemos una decisión.

Creo que esta cuestión no es mérito de ningún partido político ni del gobierno ni de los diputados justicialistas que firmemente lo impulsaron. Considero, sí, que es el resultado de una exigencia que, sin saberlo

todavía, estaba en el sujeto colectivo que cariñosamente definimos como pueblo argentino.

Recordemos algunas cosas muy trágicas. Comentaba recién con algunos compañeros que el 24 de marzo—después nos enteramos— el gobierno militar debatía dos hipótesis. Una, atribuida a aquel gobernador de Buenos Aires, el general Ibérico Saint Jean, vinculada con la tesis del aniquilamiento, pero no de diez mil sino de cien mil argentinos. Otra atribuida a la línea de Viola y de Videla, según la cual no se podía hacer desaparecer o matar a tantos. Creo que al final la tesis de Saint Jean con la enmienda Videla fue la que se llevó a cabo y terminaron desapareciendo 30 mil personas.

La dictadura militar utilizó las más avanzadas técnicas de represión. Algunos decían que los norteamericanos la habían empleado en la guerra de Vietnam y que aquí fue perfeccionada. Consistía en doblegar al pueblo, rendirlo a un enemigo invisible contra el cual no podían combatir, tratando de minarlo moralmente; que los que trabajaban y luchaban desaparecieran sin que nadie supiera qué les había pasado, de modo que la actitud familiar se moviera entre el miedo y la esperanza.

Esta hipótesis de la seguridad nacional que desarrollaron alguna vez los Estados Unidos, fue perfeccionada por la dictadura militar en la Argentina. En consecuencia, aquí asistimos al más alto grado de persecución, según el cual la técnica de los desaparecidos fue la forma en que se inmovilizaba al pueblo argentino colocándolo en una nebulosa.

Así como allá no dio resultado, aquí tampoco, porque más allá del perfeccionamiento de este sistema, fue el propio pueblo argentino el que lo desarticuló y se recuperó de esta decisión tomada por la dictadura militar.

La dictadura hizo que quedaran en el camino muchos compañeros, desde dirigentes obreros hasta hombres comprometidos de la intelectualidad, pasando también por dirigentes estudiantiles. Fue una cuestión que parecía indiscriminada, pero que tenía este destino.

Es bueno que hoy lo recordemos, porque tal vez esto debe quedar como un testimonio para las generaciones que vienen, para que no pase más y sean ellas las custodias del sistema democrático.

¡Qué cosa curiosa, señor presidente! Los medios, en aquellas épocas—y también los militares— decían que había que sacar de la conducción al gobierno justicialista porque era el festín de los corruptos. Con esos argumentos se atacó al justicialismo desde 1955 a la fecha.

El festín de los corruptos había que terminarlo, decían. Creo que los formadores de opinión, desde Neustadt hasta Grondona, e inclusive—y lo digo con

todo respeto—Ricardo Balbín, que era un hombre comprometido y amigo de Perón, no tuvieron una opinión firme y decidida frente al golpe...

**Sr. Galván.** — ¡No puede decir eso!

**Sr. Alasino.** — Sí, y lo digo sin ofender. He investigado en los diarios y en ninguno hay una condena explícita del golpe.

**Sr. Galván.** — ¡No me haga hablar, señor senador!

**Sr. Alasino.** — Es más. Debo decir, mal que les duela, que por esos años la condena definitiva al golpe no existía, como nos duelen a nosotros los indultos.

**Sr. Galván.** — ¡No es que me duela! ¡Balbín se jugó por el gobierno de ustedes! ¡No puede estar diciendo eso!

**Sr. Presidente.** — Senador Galván, con todo el respeto que tengo por don Ricardo Balbín...

**Sr. Galván.** — ¡No se puede admitir esto!

**Sr. Presidente.** — ...le pido a usted que se serene.

**Sr. Galván.** — ¡Quisiera saber quién ha levantado un solo dedo, salvo su hermano, por la libertad de Carlos Menem!

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: lo que digo es que frente al golpe no existió ninguna voz firme que se levantara para condenarlo. Todo el mundo dudó frente al golpe, tal vez influidos por eso de que había que desplazar a los corruptos.

Muchos de ellos después entendieron que hubiera sido mejor llegar con muletas—como dijo alguna vez Balbín— para evitar el golpe.

**Sr. Galván.** — ¡Por favor, señor senador! ¡No diga eso!

**Sr. Alasino.** — Y voy a decir más: no tenemos que renegar cuando decimos las verdades para asumirlas, con lo bueno y lo malo de ellas. Acá venimos a hablar de la amnistía y del punto final, dos soluciones malas del gobierno radical.

Fueron dos decisiones malas del gobierno radical porque eran inapropiadas. Empezaron bien con el juicio—y todos lo apoyamos— y, cuando había que seguir, se les había desmañado de tal forma el problema militar que tuvieron que adoptar esas medidas.

Nosotros no los condenamos; simplemente decimos que lo manejaron mal. Ellos tenían la responsabilidad histórica.

Respecto de los indultos, la situación es muy distinta. Porque cuando asume el actual presidente, el problema militar estaba sin resolver. Lo teníamos a Seineldín dando vueltas con los Albatros. Esa era la realidad. Eran las consecuencias que había dejado el gobierno radical.

Vino este presidente, tomó una decisión personal, asumió su responsabilidad histórica y los indultó. Y tras cartón, ¿qué hizo? Cuando en este país los diarios decían que venía un turco de Panamá a gobernar e imponer la ley del sable, este presidente —contra todo lo que decían— lo hizo juzgar. Y ahí está.

Esta es la diferencia de cómo se resuelve un problema cuando alguien gobierna con coraje y con decisión.

Los indultos que aprobó el presidente Menem...

**Sr. Maglietti.** — ¡Los indultos fueron peores!

**Sr. Presidente.** — Señor senador por Formosa: usted sabe perfectamente que yo, cada vez que tengo que aplicar el Reglamento, lo hago. No me obligue a tomar medidas que no quiero. No se exalte. El señor senador por Entre Ríos está haciendo uso de la palabra. Ustedes lo hicieron oportunamente...

**Sr. Galván.** — Pero no agraviamos...

**Sr. Presidente.** — Señor senador por La Rioja: no me toca a mí juzgar a los hombres de la política.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos. Le pido que redondee su exposición.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: permítame decir algunas cosas más, porque acá se quieren comparar los indultos con la amnistía y eso no tiene nada que ver. Ni en responsabilidad ni en decisión.

¿Cuál es el problema militar que existe en este país hoy? ¿Quién resolvió ese problema? ¿Quién pagó el costo político? ¿Dónde están los focos de golpes en este país? De las escuelas de especialización que estaban en Palermo, ahora una está a quinientos kilómetros —la de Caballería—, otra a seiscientos y otra a setecientos kilómetros de aquí.

Es decir, el presidente Menem fue quien solucionó el problema militar o, por lo menos, quien integró decididamente a las fuerzas armadas. ¿O no se llenan la boca todos ahora al ponerse de acuerdo con lo que dice el general Balza —lo que compartimos— en cuanto a la adhesión y subordinación permanentes de las fuerzas armadas al poder político? Ese es el resultado de la política que ha tenido este gobierno con las fuerzas armadas, pagando los costos políticos que había que pagar y asumiendo las responsabilidades del caso, pero no eliminando las culpas ni las condenas. Porque la amnistía, como saben los abogados, elimina la culpabilidad de todo. Sin embargo, de esta forma, los culpables lo serán toda la vida.

Lo que ha hecho el presidente Menem es defender la situación del país, desarmar las banderas que algunos militares todavía tenían y, con decisión, resolver el problema. ¿O acaso la Unión Cívica Radical, que disfruta esta democracia, puede comparar...?

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente.** — Ruego no dialogar...

**Sr. Alasino.** — En situaciones anteriores, ante la realidad que existe hoy —por la actitud permanente de la oposición—, ¿ustedes creen que...?

**Sr. Berhóngaray.** — Pido la palabra...

**Sr. Alasino.** — ¡No concedo interrupciones, señor presidente!

Como decía, la situación no estaría como está hoy con la democracia firmemente consolidada.

Señor presidente: me he visto en la obligación de cambiar el tono de este discurso, porque el señor senador por Formosa lo ha hecho primero. Y eso no se hace. Porque todos los que estamos aquí tenemos otras cosas para decir. Pero quienes trajimos a este debate estas cosas —tal vez las miserias—, no fuimos nosotros. Entonces, digámoslas todas. Porque todos las superamos y porque el presidente lo ha dicho. Y porque la gente lo apoyó, ya que tomó una decisión política y la asumió. Teníamos un problema que impedía a esta democracia caminar.

Claro, ahora es muy fácil hablar. Se olvidan de los Albatros y de lo que ocurría cuando asumió el presidente Menem. Incluso, de las especulaciones que se hacían cuando venía en una cañonera, vía Uruguay, el otro hombre a hacerse cargo del poder militar en la Argentina. Se trataba de la misma situación que no se había podido resolver con las leyes de obediencia debida y de punto final.

Por eso, sin ánimo de ofender a alguien, creo que debemos decirlo: nosotros asumimos el tema. Ustedes deben asumir que lo resolvieron mal, que este gobierno recibió mal resuelto el problema militar, con problemas para la democracia.

En ese sentido, el otro día hemos votado aquí una ley de reorganización de las fuerzas armadas. ¿Se podía soñar con sancionar una ley de ese tipo en la época en que estaba gobernando el doctor Alfonsín, con todo el respeto que me merece?

De todos modos, señor presidente, creo que no estamos ante un mérito del presidente ni de nuestro partido. Quien ha estado detrás de estas decisiones ha sido el pueblo argentino.

Cuando hicimos la primera reunión sobre este tema, creó que quien habla y el senador Maya fuimos los que opinamos que debíamos proceder de este modo. Quizás los otros no opinaron lo mismo. Pero vuelvo a decir: bastó que se preguntara a la gente si esto era tan importante como las urgencias económicas para que, ch sorpresa, nos encontráramos con que sí. Esta derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final es una decisión del pueblo argentino y nosotros la estamos cumpliendo. (Aplausos.)

**Sr. Presidente.** — Con las palabras pronunciadas por los señores senadores a las que esta Presidencia



adhiere con absoluta solidaridad quedó manifestado el repudio a los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 y a sus consecuencias sobre la vida de los argentinos.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley en revisión sobre derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final.

**Sr. Presidente.** — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Entre Ríos. Se necesitan dos tercios.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Piuzzi).** — (Lee)

Buenos Aires, marzo 24 de 1998.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

Artículo 1° — Derógase la ley 23.492.

Art. 2° — Derógase la ley 23.521.

Art. 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRI.

Esther H. Pereyra Arandía  
de Pérez Pardo.

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

Artículo 1° — Derógase la ley 23.492.

Art. 2° — Derógase la ley 23.521.

Art. 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Humberto J. Roggero. — Carlos A. Alvarez. —  
Federico T. Storani.

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto prevé la derogación de las leyes 23.492 y 23.521 conocidas respectivamente como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pues consideramos que las mismas fueron sancionadas en circunstancias de excepcionalidad política que han desaparecido en la actualidad.

No podemos dejar de citar en estos fundamentos la opinión de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en el sentido de que, aun cuando exista una derogación tácita de la Ley de Punto Final y que el principio de la aplicación de la ley más benigna haría estéril una nueva imputación a quienes violaron elementales derechos humanos, el

proyecto solicitamos es innegable y reafirma la voluntad ética y política de construir una democracia sólida y con futuro.

Esta expresión del Congreso implica una ratificación de los valores sustantivos del estado de derecho y un claro respaldo a la búsqueda de la verdad que nuestra sociedad está reclamando.

Humberto J. Roggero. — Carlos A. Alvarez. —  
Federico T. Storani.

**Sr. Presidente.** — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. *(Aplausos en las bancas y en las galerías.)*

**Sr. Losada.** — Señor presidente: quiero plantear una cuestión de tipo formal, a fin de que quede registrada.

Este proyecto de ley en revisión que acabamos de sancionar no fue girado a la Comisión de Derechos y Garantías, tal cual correspondía. Entonces, si bien ya fue votada la iniciativa, quiero que quede registrado que el giro también debió ser hecho a la mencionada comisión.

**Sr. Presidente.** — Queda constancia de su manifestación, señor senador.

#### 5

#### ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente.** — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados desde la última sesión, cuya nómina se hizo llegar oportunamente a los señores senadores. Este es el momento en que pueden hacer las observaciones que estimen pertinentes.

**Sr. Secretario (Piuzzi).** — (Lee)

—La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

#### I

#### Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado

Decreto del 18 de marzo por el que se aprueban las plantas de personal permanente y temporario de la Auditoría General de la Nación (D.P. 160/98). *(A sus antecedentes.)*

—Decreto de la misma fecha por el que se autoriza al presidente de la Auditoría General de la Nación a utilizar los montos de créditos resultantes de los sobrantes de los ejercicios 1995 y 1996 (D.P. 161/98). *(A sus antecedentes.)*

—Decreto del 20 de marzo por el que se designa al señor senador Del Piero para integrar la Comisión de Educación,